

El agro ve desinterés del Gobierno en el sector

La agenda productiva acordada en la cumbre del agro, realizada en Santa Cruz el 2015, quedó “estancada”, dijo ayer el presidente de la CAO, Julio Roda, quien ve falta de interés del Gobierno por resolver los problemas.

Los ministros César Cocarico y Verónica Ramos negaron que haya estancamiento y anunciaron que se retomarán las reuniones. Ambos estuvieron en Santa Cruz atendiendo las demandas de una organización paralela a la CAO.

“Nosotros hemos tenido varias reuniones con la ministra Ramos (de Desarrollo Productivo) y el ministro Cocarico (de Desarrollo Rural y Tierras), (pero) en el tiempo que ellos llevan en el Ministerio no ha habido ningún avance, cero. Estamos en un estancamiento absoluto”, sostuvo Roda en una conferencia de prensa previa a un recorrido por zonas productivas cruceñas, organizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Según Cocarico, hay una constante relación con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y con la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo) sólo que por ahora no hay reuniones. “No nos hemos distanciado, hay muchas cosas que hemos estado trabajando y, obviamente, hay que dar continuidad especialmente a las conclusiones de la cumbre”, señaló.

A su vez, Ramos sostuvo que se debe discutir la observación que hizo la CAO y que ayer estaban atendiendo la problemática de la soya. En esa reunión no estaba invitado ningún representante de Anapo.

Cocarico dijo que la semana próxima estará en Santa Cruz para reunirse con los ganaderos y aprovechará para acercarse a Anapo y la CAO para retomar el diálogo de la agenda productiva.

En la cumbre agropecuaria se acordó triplicar las exportaciones del agro, ampliar la superficie de desmonte de cinco a 20 hectáreas para ampliar la frontera agrícola e incrementar en 10 veces la exportación ganadera.

En su intervención tras las conclusiones de la cumbre del agro, el vicepresidente Álvaro García dijo que la hoja de ruta marcada era un mandato para el Gobierno que se traduciría en leyes a aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Roda afirmó que para cumplir con lo pactado en ese evento es necesario un trabajo conjunto con el Gobierno. “Para que nosotros podamos cumplir con lo que se dijo (...) tenemos que tener condiciones”, indicó.

Respecto a la inversión privada, Roda señaló que el sector agropecuario invierte en tecnología de última generación y en la ampliación de las superficies de cultivos y rechazó la versión del ministro de Economía, Luis Arce, respecto a la baja inversión del sector privado.

Por su parte, el presidente de Anapo, Reynaldo Díaz, afirmó que a pesar de algunas reuniones sostenidas con Ramos y Cocarico no hay avances. “En la desesperación (por ser escuchados) hemos tratado de que nos escuchen otros actores, como ministros que vinieron la semana pasada. Hemos expuesto (nuestra situación) con números”, afirmó.

La semana pasada, los productores lograron un encuentro con el ministro de Defensa, Reymi Ferreira. Sin embargo, sólo sirvió para informarle de la situación del sector productivo, aquejado por los bajos precios, pero no se arribó a ninguna conclusión.

CAO advierte de un “bajón” en la producción

El presidente de la CAO, Julio Roda, indicó que hay un desincentivo a la producción en el país por lo que advirtió de un “bajón” en la producción en todos los rubros que componen el agro.

“Creo que vienen varios despidos (...), el productor lo primero que hace es retirar a la gente porque no tiene condiciones para pagar y obviamente va a haber desempleo, va a ver escasez”, afirmó.

El ingreso de contrabando, el precio actual de la soya y los límites para la exportación son los principales factores que ponen en riesgo al sector productor del país, según Roda.

Soya: Gobierno atiende a pequeños productores

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, informó ayer que el Gobierno aprobó la exportación de 100.000 toneladas de soya, después de precautelar el consumo interno que principalmente se orienta a la fabricación de aceite comestible.

“Se dispuso la exportación de 100.000 toneladas y a partir de aquello, mejoraron los precios de comercialización de soya; la fábrica de aceite Fino está comprando a 233 dólares la tonelada y ya no así a 210 dólares”, explicó, citado en un boletín de prensa enviado a la ABI.

La Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo) logró ayer, por segunda vez en lo que va del año, que el Gobierno les envíe dos ministros para atender sus demandas.

La ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, y Cocarico, estuvieron reunidos con este sector en la sede nacional de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), por espacio de dos horas.

Cappo, que preside Isidoro Barrientos, junto a campesinos de base, plantearon a los dos ministros una solución al problema de los bajos precios de la soya, los altos costos de producción y el bajo rendimiento que tienen desalentados a los agricultores.

Barrientos dijo que una de las soluciones es que el Gobierno autorice la exportación de 300.000 toneladas del grano y que la industria oleaginosa nacional pague un precio más acorde a lo establecido a nivel internacional.

Barrientos cree que el precio a pagar en el mercado interno debe ser al menos de 250 dólares la tonelada, aunque otros productores como Pastor Vargas, dijeron que el precio debe estar entre los 280 a 300 dólares, pues ayer el precio internacional se cotizó en 365 dólares la tonelada.

La ministra Ramos dijo que es complicado establecer un precio para las industrias, pues hay una serie de variables que tienen que ver con la oferta, la demanda, pero que para lograr un alza en el precio del mercado interno, se va a liberar más cupos de exportación del grano, aunque señaló que no llegará al 100 por ciento.

Otra de las medidas para paliar los altos costos operativos será la importación de insumos agrícolas, especialmente agroquímicos para venderlos en menor precio a los productores, pues el gasto de este ítem representa entre el 30 y 40 por ciento de la inversión. Una hectárea de soya tiene un costo operativo de entre 500 y 550 dólares.

Proyectan incrementar uso de semilla certificada

El director de Semillas del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), Rider Andrade, dijo ayer que se proyecta incrementar el uso de semilla certificada a 60 por ciento para ser uno de los primeros de la región.

Informó que actualmente Bolivia ocupa el cuarto lugar con 56 por ciento de uso de semillas certificadas en más de 3,5 millones de hectáreas cultivadas, por encima de Paraguay, Perú y Chile.

“De los 10 países en Sudamérica nosotros estamos peleando más o menos el cuarto puesto después de Brasil que tiene 68% y Argentina pero el cuarto puesto estamos muy posesionados en el uso de semilla certificada (...)”, explicó en la Feria Tecnológica del Iniaf que se realizó en La Paz.

Andrade dijo que en los últimos ocho años se lograron grandes avances en el tema e informó que hasta la fecha el Iniaf tiene certificados de más de 30 cultivos y unas 300 variedades de semillas.

El Deber / Santa Cruz

Estatales de alimentos consolidan red regional

Los Sistemas Públicos de Comercialización y Abastecimiento de Alimentos (SPAA) de América Latina y el Caribe se dieron cita en Santa Cruz para consolidar la red regional de colaboración y fortalecimiento de entidades del rubro.

Como representante de Bolivia, la Empresa de Apoyo a la producción de Alimentos (Emapa) intercambia su experiencia en el manejo de reservas estratégicas, un tema que tiene muy avanzado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) forma parte de este proceso como facilitadora de las reuniones y con el apoyo de una Secretaría Técnica que fiscaliza las acciones de constitución de la red y la puesta en marcha de las iniciativas que emanen de ellas, dijo Fermín Moreira, representante de la FAO.

La agenda

La intervención de los países miembros forma parte de la agenda, además contempla la formulación de sus estatutos y la elección de una directiva.

Observan a sojeros por no usar 100% de cupo de venta

El Gobierno observó que los productores sojeros no están haciendo uso pleno del cupo de 100.000 toneladas de exportación que autorizó en marzo y ratificó que no se podrá cumplir el pedido de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Sorgo (Anapo), de liberar el ciento por ciento de la producción para el comercio exterior.

La ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, que ayer sostuvo reunión en dependencias de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) junto al ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, con alrededor de 50 pequeños productores de la zona de San Julián, descartó esa ampliación y refirió que hasta el momento los agricultores solo registraron 75.000 toneladas para exportación (representa un 75%).

Cocarico informó que el Gobierno aprobó únicamente la exportación de 100.000 toneladas de soya, precautelando el consumo interno que va principalmente a la fabricación de aceite comestible. “Antes de liberar más cantidad de grano de soya para exportar, se debe pensar en el consumo nacional; si se libera toda la producción de soya para la exportación, tendríamos escasez de aceite”, agregó.

Al respecto el presidente de Anapo, Reynaldo Díaz, rechazó aquello de que no se usa el 100% del cupo, indicando que los productores piden un cupo de 5.000 toneladas y solo le aprueban 2.500, y si es 2.000, solo dan 1.000 toneladas.

“Están protegiendo a una docena de industrias y nos están hundiendo, porque nos vemos obligados a vender por debajo de los costos”, puntualizó.

Mejor precio

El presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, indicó que en la reunión de la que participaron también representantes de industrias aceiteras, se habló de la necesidad de que se aumente el precio del grano de oro, tema que quedó para ser coordinado entre los productores y las empresas.

“No podemos imponer, se tiene que encontrar solución mediante el diálogo entre los agricultores y las industrias según las necesidades comunes”, expresó Verónica Ramos.

Por su lado, Cocarico indicó que vienen realizando reuniones con empresas, para que las mismas mejoren los precios de comercialización y ayuden al productor. “Si un productor sojero vende a 200 dólares la tonelada, va a tener 400 dólares por hectárea más o menos. Si ha gastado 450 dólares, no tendrá ninguna ganancia, más bien pérdida, porque el costo de producción ha sido mucho más alto que el costo de comercialización; esa era la preocupación”, manifestó.

Sectores apuntan a eliminar comercio de mínima cuantía

La dirigencia del aparato productivo cruceño y autoridades de la Gobernación alertan que la internación de mercadería bajo el paraguas de la póliza de mínima cuantía es un golpe a la yugular de los diferentes sectores que no pueden competir con los bajos precios.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña, Luis Alberto Alpire, dijo que el sector productivo atraviesa una crisis por la inundación de productos extranjeros. “Estamos sufriendo serios embates, no solamente del contrabando sino de la importación formal que ingresa desde Argentina y Brasil con pólizas de mínima cuantía”, señaló.

Explicó que la devaluación de sus monedas redundó en la caída de sus precios en dólares haciendo su producción más competitiva que la boliviana.

El pedido de Alpire es reforzar los controles al contrabando y a las importaciones, eliminando la póliza de mínima cuantía que, en su criterio, ha sido corrompida por los comerciantes para formalizar el comercio ilegal.

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la demanda es modificar la Ley General de Aduana. Su titular, Julio Roda, pidió atender los problemas del agro. “No hay condiciones para competir con estos productos. El desincentivo a la producción golpea nuestra economía”, alertó.

Para Luis Barbery, presidente de Unagro, la situación de la industria también es crítica, haciéndose difícil competir en precios, que son más bajos que los costos para empresas bolivianas.

“La importación mínima favorece a pocas familias y perjudica a miles de trabajadores”, afirmó Barbery.

Roda subrayó que el bajón es común para el sector y proyectó la migración de la gente de campo a la ciudad por desempleo, señalando que la situación afectará también a la agroindustria, que se verá obligada a hacer despidos. “El fusible que salta en una crisis empresarial es el empleado”, indicó.

Alpire identificó el origen de las importaciones viciadas en el comercio fronterizo vecinal, que permite a los residentes de las fronteras internar un valor de \$us 300 por mes desde Argentina y \$us 150 desde Brasil para cada familia.

Desde la Aduana se informó que se tiene una agenda de reuniones bilaterales con Argentina y con Brasil para tocar el tema.